

MAYO

REVISIÓN DEL AÑO



BAHRÉIN: En uno de muchos actos de represión, al menos seis personas fueron asesinadas por la policía en una sentada pacífica en la ciudad de Diraz.



EGIPTO: Una nueva ley sobre ONG introdujo mayores restricciones para la sociedad civil, en el marco de un espacio cívico severamente limitado.

En mayo el gobierno y los grupos rebeldes acordaron un alto el **fuego** en Mozambique, luego de que el conflicto civil recrudeciera tras los cuestionados comicios de octubre de 2014. El conflicto reavivó las **restricciones** impuestas sobre las libertades fundamentales de la sociedad civil, con amenazas y diversas formas de hostigamiento a los grupos de sociedad civil que operaban en la región central del país, donde se produjo la mayor parte de las hostilidades. El cese del fuego despertó esperanzas de que las condiciones para la sociedad civil pudieran mejorar.

En Francia, por su parte, las elecciones presidenciales celebradas en abril y mayo ofrecieron nueva evidencia de las turbulencias que en muchos países atraviesa la política contemporánea. Si bien el candidato que logró un **triunfo decisivo** en la segunda vuelta, Emmanuel Macron, era abiertamente centrista, representaba a un partido que había sido fundado solo un año atrás, *En Marche!*, el cual atrajo el apoyo de votantes descontentos de todo el espectro político. Ninguno de los dos partidos que habían gobernado Francia en el pasado llegó a la segunda vuelta: el Partido Republicano, de centroderecha, salió tercero, superado por el Frente Nacional, de extrema derecha, mientras que el Partido Socialista del presidente saliente François Hollande, quien no se presentó como candidato, salió en quinto lugar, cediendo el cuarto puesto a un nuevo partido de izquierda, *La France Insoumise*. En la segunda vuelta electoral el Frente Nacional registró la mejor votación de su historia, alcanzando el 34% de los votos. Al igual que sus pares de muchos otros países, los votantes franceses se mostraron dispuestos a abandonar las afiliaciones tradicionales y adoptar plataformas políticas nuevas, a veces extremas, colocando a la sociedad civil francesa ante la necesidad de comprender el enojo subyacente a estas opciones políticas, y de proponer una respuesta que ofrezca alternativas al extremismo.

En Argelia, en el período previo a las **elecciones de mayo** el gobierno prohibió a los medios de comunicación que informaran sobre las organizaciones que pedían un boicot de las elecciones. Se realizaron varias manifestaciones antes de las elecciones, entre ellas una de jóvenes que protestaron por los

problemas económicos y el déficit de gobernanza y otra convocada por los sindicatos. Las autoridades las dispersaron por la fuerza, efectuaron numerosas detenciones y acusaron a los manifestantes de desestabilizar el país. En vísperas de las elecciones de junio/julio en **Papúa Nueva Guinea**, los partidarios de uno de los candidatos **hostigaron y atacaron** a los trabajadores de los noticieros de la televisión, y exigieron que borrarán las filmaciones. Otros periodistas fueron **amenazados** cuando se aproximaban las elecciones.

En Fiji, un **proyecto de ley** amenazó con imponer cuantiosas multas y sentencias de prisión por “difamar, degradar o socavar la santidad del parlamento”, lo cual produjo preocupación en la sociedad civil por sus implicancias para la libertad de expresión en vísperas de las elecciones de 2018. En Egipto, por su parte, en anticipación de las elecciones presidenciales de 2018, la **aprobación de una nueva ley sobre ONG** vino a sumarse a la arquitectura de la represión en un espacio cívico restringido.

El gobierno de Omán decidió conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa con el **bloqueo del acceso** al sitio web de *Mowatin* (Ciudadano), una de las pocas fuentes independientes de noticias. No fue la primera vez en que Mowatin sufrió ataques. Después del **hostigamiento padecido en 2016**, el sitio se había visto obligado a suspender sus operaciones durante cierto tiempo. En mayo, el gobierno también arrestó a varios defensores de derechos humanos que tenían actividad en internet y prorrogó la suspensión del periódico independiente Azamn. El periódico, una publicación independiente con un historial de informes sobre corrupción, había sido obligado a cerrar en agosto de 2016, y los principales integrantes de su equipo editorial habían sido detenidos. En octubre, la Corte Suprema emitió un fallo definitivo que confirmó su **cierre**. Iraq, entretanto, continuó presentando condiciones muy difíciles para el periodismo independiente, y fue escenario de varias muertes de periodistas que cubrían conflictos. Además, en mayo las autoridades de la provincia occidental de Al-Anbar **ordenaron** el cierre de la oficina del canal satelital de noticias Diljah en Ramadi tras la emisión de un informe sobre la complicidad de los funcionarios locales con actos de contrabando.

En Croacia, varios periodistas sufrieron una serie de **agresiones físicas y amenazas** en abril y mayo. El periodista Sinisa Vickov sufrió una conmoción cerebral en abril, en la ciudad de Split, tras ser expulsado de una reunión del gobierno local. En mayo la confrontación con el gobierno local fue más directa: el alcalde de la ciudad de Požega atacó físicamente al periodista Mladen Mirkovic. Las amenazas contra periodistas **continuaron** a lo largo del año. En Túnez, **Sami Ben Gharbia**, un conocido periodista del sitio web Nawaat, fue detenido e interrogado durante seis horas después de que el sitio filtrara información sobre un proyecto de ley que podría resultar en indultos para funcionarios implicados en casos de corrupción. Durante el interrogatorio, habría sido presionado para que revelara la fuente de la filtración y proveyera información sobre los colaboradores de Nawaat. Un hecho más positivo, ocurrido en Túnez el mes anterior, fue el lanzamiento del Consejo de Prensa Independiente, resultado del intenso trabajo realizado por el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos. El gobierno de Costa de Marfil, entretanto, respondió en mayo a la presión pública y acordó **retirar** un polémico proyecto de ley de medios que incluía duras penas para delitos de prensa. Tras una serie de protestas y una petición de la sociedad civil, el gobierno reconoció que necesitaba considerar mejor el proyecto de ley.

Un desarrollo más preocupante se dio en Tailandia, donde se aprobó una nueva **ley de medios** que exige que todo aquel que produzca ingresos mediante la generación de contenidos de noticias se registre en el Consejo Nacional de Medios y que los trabajadores de los medios de comunicación lleven consigo tarjetas de identificación de prensa en todo momento. El incumplimiento de las nuevas normas puede acarrear penas de prisión de hasta tres años. En 2017 también se observaron en Tailandia muchos casos de aplicación punitiva de las leyes de lesa majestad, que prohíben de modo tajante toda expresión crítica contra monarquía. En un solo día en mayo, **seis personas** fueron acusadas de delitos de lesa majestad, entre ellas Prawet Prapanukul, un conocido abogado de derechos humanos y crítico del gobierno que se enfrenta a la perspectiva de pasar el resto de su vida en la cárcel.

En Chad, por su parte, **dos líderes de la sociedad civil** estuvieron muy cerca de terminar en prisión. Nadjo Kaïna y Bertrand Solloand recibieron condenas en suspenso de seis meses por intento de conspiración y por organizar una manifestación no autorizada; el mes anterior se habían reunido para planificar un día de acción centrado en los problemas de gobernanza. La protesta se iba a realizar en el primer aniversario de la última renovación del mandato de 27 años del presidente Idriss Déby. Nadjo Kaïna era portavoz del movimiento ciudadano *IYINA* ('estamos cansados'). Doce miembros de IYINA fueron detenidos posteriormente, el día del intento de protesta, mientras que también **fueron prohibidas** otras protestas convocadas por estudiantes y por trabajadores movilizados en reclamo de salarios impagos.

Grecia experimentó una jornada de **huelga general** contra recortes del gasto público y una protesta contra la austeridad en la capital, Atenas, en la que participaron alrededor de 12.000 personas, y en la que hubo algunos enfrentamientos violentos con la policía. En Biafra, masivas protestas que instaban a la ciudadanía a **quedarse en casa** fueron convocadas por grupos secesionistas en cinco estados del sureste de Nigeria. Estas marcaron el 50º aniversario del intento de secesión de Biafra de Nigeria. Las protestas continuaron más allá de mayo y tuvieron el efecto de paralizar efectivamente las economías de los estados involucrados. En septiembre el gobierno respondió con el lanzamiento de una operación militar, Python Dance II, que dejó un saldo de varios muertos y heridos durante una redada en la vivienda de un líder separatista. El gobierno de Bahréin continuó reprimiendo despiadadamente a los disidentes, y **mató al menos a seis personas en respuesta a una sentada pacífica de protesta**.

En Kazajstán, el organizador de una **protesta** por la corrupción y la situación socioeconómica se vio obligado a cancelar el evento tras sufrir intimidaciones. Antes de que la protesta tuviera lugar, la vivienda de Marat Daultbayev fue allanada por la policía y él fue acusado de violar las normas residenciales. Fue una de las muchas restricciones experimentadas en torno del lanzamiento de la Expo-2017, una exposición internacional destinada a mejorar la reputación internacional del país.

En el caso de Suecia se observaron manifestaciones más perturbadoras: en mayo un grupo neonazi, el Movimiento de Resistencia Nórdica (NRM), dio señales de envalentonamiento al organizar una protesta a la que asistieron alrededor de 500 personas en el pueblo de Falun. Ante la inminente protesta, las autoridades se vieron obligadas a trasladar a los residentes de un centro infantil para refugiados por motivos de seguridad. Se trató de uno de los muchos incidentes que tuvieron lugar en 2017. En septiembre, por ejemplo, se produjeron **enfrentamientos violentos** entre manifestantes del NRM y agentes de policía cuando el NRM llevó a cabo una manifestación durante la festividad judía de Yom Kipur. En la vecina Noruega, por su parte, en marzo la policía **prohibió** una protesta anti-LGBTI del NRM, alegando el riesgo de contramanifestaciones, y en Finlandia un fallo judicial ordenó en noviembre la **clausura** de la filial finlandesa del NRM a causa de su empleo de la violencia y su discurso de odio.

Los peligros para los defensores de derechos humanos en Libia, donde ningún gobierno controla todo el territorio, quedaron claros cuando **Tarek Milad Mohamed Al Gadhafi**, fundador de una organización de derechos humanos, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad. No se proporcionó ninguna información tras su desaparición. Muchos otros defensores de derechos humanos, especialmente defensoras de los derechos de las mujeres, recibieron amenazas.

Las autoridades de Qatar se colocaron en flagrante contradicción con sus obligaciones internacionales bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados cuando, según se informó, deportaron por la fuerza a Arabia Saudita al defensor de derechos humanos **Mohammed Abdullah Al-Otaibi**, quien se encontraba en Qatar con su esposa y se dirigía a Noruega, donde les había sido concedido asilo político. Según se reportó, el estado de Qatar también extendió la prohibición de viajar al exterior impuesta a **Najeeb Al-Nuaimi**, un prominente abogado de derechos humanos.

BAHRÉIN: EL MOVIMIENTO PRO- DEMOCRACIA INTENTA SOBREVIVIR A UNA GUERRA DE DESGASTE

La sociedad civil de **Bahréin** ha padecido serias restricciones desde que las protestas por la democracia emergieron en 2011. El pueblo se movilizó para exigir libertad política, igualdad de derechos para la mayoría chiíta de Bahréin y la reforma de la monarquía minoritaria sunita, y ocupó la Plaza de la Perla en la capital, Manama, el corazón de la protesta. La ocupación fue brutalmente aplastada tras la intervención de Arabia Saudita en marzo de 2011, y si bien las protestas han continuado esporádicamente desde entonces, el movimiento de protesta ha sufrido una larga guerra de desgaste, en la cual muchos líderes de la protesta han sido detenidos y algunos despojados de su ciudadanía, y el Estado ha utilizado una violencia despiadada para suprimir las manifestaciones.

La **investigación sobre el movimiento de protesta de Bahréin** realizada por CIVICUS, basada en entrevistas con líderes y participantes de las protestas, describe el modo en que a libertad de reunión está siendo fuertemente reprimida. Los entrevistados señalaron una batería de medidas represivas que se utilizan para silenciar las protestas, que incluyen el uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, restricciones legales, infiltración estatal, restricciones contra periodistas, redes sociales y grupos de la sociedad civil, y estigmatización por parte del Estado. Entre las amenazas identificadas, las más destacadas fueron el uso excesivo de la fuerza, las restricciones legales y las detenciones arbitrarias.

Los acontecimientos de 2017 lamentablemente proporcionaron nueva evidencia de la aplicación de estas tácticas restrictivas. En enero, la policía

utilizó gases lacrimógenos y escopetas de perdigones contra manifestantes que protestaban por la ejecución de tres personas condenadas en juicios injustos. Y en el suceso que recientemente despertó la mayor indignación, en el mes de mayo, por lo menos seis personas fueron asesinadas en la ciudad de **Diraz** cuando la policía reprimió una sentada pacífica. Los manifestantes estaban protestando en favor del sheikh Isa Qassim, alto clérigo chiíta de Bahréin y vocal crítico del gobierno, que en junio de 2016 había sido despojado de su ciudadanía y acusado de lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad utilizaron municiones reales y gases lacrimógenos. Además de seis muertos, hubo por lo menos 286 personas arrestadas.

Según **Michael Payne** y **Sam Jones** de **Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain**, una OSC internacional integrada por ciudadanos de Bahréin y los Estados Unidos, la situación de la sociedad civil es ahora peor que antes de que comenzara el movimiento de protesta:

Las restricciones actuales efectivamente constituyen una amenaza existencial para la sociedad civil independiente. Desde 2011 venimos expresando de manera constante una grave preocupación por el hecho de que el espacio para la sociedad civil y política se está cerrando. Desde 2016 ese espacio está prácticamente cerrado. Casi todos los activistas y organizaciones de la sociedad civil independiente del país se han enfrentado a alguna forma de ataque, desde acoso judicial hasta la lisa y llana disolución forzosa. Muchos activistas y organizaciones son simplemente incapaces de mantener el mismo ritmo de trabajo, ya que están ocupados en batallas legales o intentando eludir represalias. Otros han abandonado el país en busca de asilo, con la esperanza de continuar su trabajo desde el extranjero.

*Desde enero, el gobierno ha tomado varias medidas represivas sin precedentes, tales como permitir que los **tribunales militares** juzguen a civiles; **devolverle** a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el organismo de inteligencia del país, el poder de efectuar arrestos dentro*



Activistas por los derechos humanos en Bahréin protestan fuera de la embajada de Arabia Saudita en Washington, D.C.

Crédito: Getty Images

del país; dar por finalizada de hecho una moratoria sobre la pena de muerte al **ejecutar** a tres víctimas de tortura; **disolver** el último grupo importante de oposición política, Wa'ad; **cerrar** el único medio de comunicación independiente, Al-Wasat; **torturar e intimidar** a los activistas y sus familias, entre ellos al defensor de derechos humanos Ebtisam al-Saegh; y **sentenciar** a Nabeel Rajab, presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos, a **dos años** de prisión por cargos relacionados exclusivamente con el ejercicio de la libertad de expresión.

En muchos aspectos, el actual nivel de represión es incluso peor que en 2011, cuando el gobierno declaró el estado de emergencia y aplastó violentamente al movimiento democrático en el país. Muchas de las restricciones actuales sobre el espacio de la sociedad civil han sido legisladas o implementadas bajo circunstancias 'normales' y no bajo un estado de emergencia, razón por la cual los activistas han **descripto** a la situación actual como una "ley marcial de facto". La expansión de la jurisdicción de los tribunales militares y la restauración de la autoridad de la NSA para efectuar arrestos podrían, juntas, constituir las bases de un sistema jurídico paralelo para personas que se considere que ponen en peligro la seguridad nacional, en el marco del cual las autoridades podrán hacer desaparecer, torturar, encarcelar o ejecutar a 'enemigos del Estado' tales como los activistas de la sociedad civil, de manera más rápida y silenciosa.

Michael y Sam señalan la necesidad de tratar de comprender la dinámica de poder que está en juego en Bahréin, y considerar qué es lo que motiva la represión de la sociedad civil:

Dada la opacidad de un Estado como Bahréin - donde todos los puestos de poder son ocupados por miembros de la misma familia real, Al Khalifa - no está del todo claro cuál es la principal motivación del actual asalto contra la sociedad civil. En particular, en el pico de

los disturbios en 2011, los llamados 'reformistas' de la monarquía supuestamente pidieron moderación y buscaron garantizar una resolución política sostenible a través del diálogo con la oposición. Simultáneamente, la 'línea dura' presionó para que los disturbios fueran tratados como un problema de seguridad y aplastados con fuerza. Si acaso se puede hablar de una única motivación que atraviesa a ambos bandos, ella es básicamente la supervivencia de la monarquía.

El enfoque de línea dura en última instancia ha llegado a dominar la estrategia de la monarquía. Para este bando, y cada vez más para la monarquía como un todo, el objetivo parece ser sencillamente mantenerse en el poder, y está animado por un chauvinismo real/familiar, o incluso sectario, que apunta a marginalizar a la minoría no real/chiíta. Los dirigentes de la línea dura también controlan efectivamente al establishment de seguridad y han utilizado a instituciones como el Ministerio del Interior, la NSA y el Ministerio de Justicia para encuadrar a la oposición - y a la sociedad civil independiente - como problema de seguridad sectario con el cual se ha de lidiar por medio de la imposición selectiva de la ley o con la violencia pura y dura.

Quizás la motivación más próxima sean las elecciones para la cámara baja del parlamento de Bahréin, el Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional, programadas para fines de 2018. La Asamblea Nacional en su conjunto está maniatada legislativamente y la cámara alta sigue siendo nombrada por el rey, de manera que en gran medida no puede o no está dispuesta a actuar como un control efectivo sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, el gobierno probablemente ve las elecciones como una oportunidad simbólica para persuadir al mundo de que ha hecho avances democráticos a la vez que crea una cámara baja dócil con falsas pretensiones de legitimidad internacional. Para asegurarse de que los partidarios acérrimos de la monarquía consigan una proporción importante de los votos, el gobierno ha limpiado activamente la escena de toda oposición real antes de la elección.

La historia de Bahréin, con sus movimientos y organizaciones de la sociedad civil vibrantes e independientes, es única en la región del Golfo, y toda estrategia del gobierno para eliminarla por completo o dominar la escena requiere de un significativo uso de la fuerza. La adopción por parte del gobierno de una postura de línea netamente dura en relación con la sociedad civil independiente necesariamente trae aparejada una escalada de violencia y represión como la que hemos presenciado recientemente.

Al ejecutar sus muchos actos de represión, el gobierno ha **contravenido claramente** sus obligaciones internacionales, cosa que fue señalada por diversos funcionarios de alto nivel: en **octubre**, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, afirmó que el espacio democrático en Bahréin se hallaba “esencialmente cerrado”, mientras que ese mismo mes, el Secretario General Auxiliar de la ONU, Andrew Gilmour, informó sobre la adopción de represalias contra miembros de la sociedad civil de Bahréin que cooperaron con el sistema de la ONU. Y sin embargo, el Estado padece menos presión internacional de la que cabría esperar. Con una población de menos de 1,5 millones, Bahréin es uno de los países más pequeños de Medio Oriente; no obstante, su posicionamiento como socio estratégico de poderosos intereses extranjeros le otorga respaldo para ejercer la represión con impunidad. Michael y Sam describen las alianzas claves que están en juego:

*Bahréin es un país muy pequeño con crecientes problemas económicos, el principal de los cuales es el virtual **agotamiento** del petróleo. Tanto estratégica como financieramente, es extremadamente dependiente de aliados externos como Arabia Saudita, los EEUU y el Reino Unido. Los gobiernos de esos tres países han tenido un impacto significativo en la evolución de la represión.*

Arabia Saudita ha desempeñado el rol más visible, ya que ha liderado un contingente de la Fuerza del Escudo de la Península, del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), para apoyar dentro de Bahréin el esfuerzo final del reino para eliminar las protestas de la Plaza de la Perla en 2011. Si bien no queda claro si estas tropas cometieron alguna violación directa de los derechos humanos, el despliegue ya sea forzó, ya confirmó el giro del gobierno hacia una postura de línea dura, centrada en la seguridad, en relación con el conflicto. Se especula que los líderes sauditas, que rara vez han respetado siquiera algo parecido a una sociedad civil y política independiente, hacía tiempo que desaprobaban las concesiones o reformas del gobierno de Bahréin y lo instaron a sofocar enérgicamente todo disenso. El gobierno saudita, en competencia con Irán por el dominio regional, históricamente ha propagado, o por lo menos tolerado, el discurso de odio contra los chiitas y un relato del conflicto sectario que describe al pueblo

EL GRUESO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS MOVIMIENTOS DE OPOSICIÓN DE BAHRÉIN SE HAN MANTENIDO FIRMEMENTE COMPROMETIDOS CON EL ACTIVISMO NO VIOLENTO Y LA ACCIÓN INTERNACIONAL, Y SI LOGRAN SOPORTAR LAS CRECIENTES RESTRICCIONES QUE LES IMPONE EL GOBIERNO, DESEMPEÑARÁN EL PAPEL CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS SOSTENIBLES.

árabe chiíta como una quinta columna desleal. En años recientes ha respondido con violencia a los alzamientos en su provincia oriental, predominantemente chiíta, y según se ha informado ha **financiado** a la sociedad política salafista A-Asala de Bahréin, que apoya al gobierno. La influencia saudita ha apuntalado sólidamente el enfoque de línea dura de Bahréin, afianzando un relato sectario y motivando una respuesta violenta ante el disenso.

En los últimos años los EEUU han adoptado una posición compleja y por momentos contradictoria en relación con Bahréin, con efectos que han variado según la administración a cargo o el sector del gobierno en cuestión. Las relaciones entre Bahréin y los EEUU se centran intensamente en la alianza defensiva, estructurada en torno de las instalaciones navales de los EEUU en Manama, una de las bases militares estadounidenses más importantes en la región. Con respecto a lo sucedido en 2011 y en los años siguientes, los EEUU buscaron básicamente moderar la respuesta del gobierno de Bahréin, instándolo a introducir reformas y restringiendo la asistencia de seguridad por motivos de derechos humanos. A puertas cerradas, daría la impresión de que los EEUU no ejercieron toda la presión posible y permitieron que la CCEAG hiciera lo que fuera con **Bahréin** a **cambio** de su apoyo a la intervención de la OTAN en **Libia** en 2011. En los años subsiguientes, bajo el gobierno de Obama, los EEUU jugaron un papel retóricamente positivo, a la vez que levantaban algunas restricciones al bloqueo de armamentos.

El gobierno de Trump, sin embargo, ha dado marcha **atrás** con las restricciones que quedaban en pie, aprobando transferencias de armas pendientes así como otras nuevas, sin imponer condiciones en materia de derechos humanos. La decisión del presidente Trump de que Arabia Saudita fuera el destino de su primer viaje al extranjero y de reunirse con el rey Hamad de Bahréin, prometiendo **una relación sin “tensiones”**, no puede separarse de la jugada del reino, tan solo

unos días después, de **atacar violentamente** la sentada pacífica en Diraz. No es una coincidencia que el día más sangriento que tuvo lugar en Bahréin desde antes de 2011 ocurriera solo meses después de iniciado el gobierno de Trump. El secretario general en ejercicio del fallido Instituto Nacional para los Derechos Humanos de Bahréin, que apoyó las ejecuciones que terminaron con la moratoria de facto de la pena de muerte en el país, resumió el sentimiento generalizado entre los funcionarios del gobierno cuando **twiteó** esperanzado tras las elecciones en EEUU: “Con @realDonaldTrump como presidente, la maldición de la Primavera Árabe oficialmente ha terminado”.

El Reino Unido, ex poder colonial, ha desempeñado un rol muy **negativo** de manera más coherente y silenciosa. El gobierno británico fue el creador de muchas de las instituciones de seguridad de Bahréin, y ha continuado asesorando a las autoridades en sus supuestos intentos de implementar programas de capacitación sobre derechos humanos y establecer mecanismos de control en materia de derechos humanos. Estas iniciativas han constituido decididos fracasos, si es que alguna vez fueron emprendidas de buena fe. Pese a que abusos graves como la tortura, la desaparición forzada, el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria han continuado al mismo ritmo y en algunos casos han aumentado, el Reino Unido ha seguido ayudando a **instituciones como el Ombudsman** del Ministerio del Interior a oscurecer o encubrir las actividades ilícitas del gobierno. Aunque aparentemente creados con buenas intenciones, estos mecanismos de supervisión se ven **obstaculizados** por mandatos deficientes y falta de voluntad política para responsabilizar a los funcionarios. En lugar de restringir su apoyo o reprimir enérgicamente al gobierno de Bahréin, el Reino Unido sigue apoyando a estas instituciones, en última instancia permitiendo que las autoridades de Bahréin finjan que están aplicando reformas mientras las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo violentamente a los disidentes.

En el sector de seguridad se evidencia el papel perjudicial de los intereses comerciales internacionales. Aunque los fabricantes de armas normalmente no se conmueven cuando las armas que ellos producen son utilizadas para matar gente, Bahréin ha sido foco de controversias en la industria armamentista a causa del uso letal de armas no letales para el control de multitudes. En numerosas ocasiones las fuerzas de seguridad de Bahréin han disparado granadas de gases lacrimógenos de largo alcance a quemarropa contra manifestantes individuales, utilizándolas como proyectiles. Las fuerzas del Ministerio del Interior también suelen disparar a quemarropa con perdigones, tal como sucedió en el caso de la redada letal de Diraz. Los expertos de la industria han comentado que el grado de violación de los acuerdos de uso por parte de Bahréin y el abuso de los gases lacrimógenos y otras armas para control de multitudes “no tenían precedentes”. Como resultado de ello, una cantidad de países, entre ellos los EEUU y Corea del Sur, han suspendido por completo la venta de gases lacrimógenos y armas ligeras a Bahréin.

Pese a la represión generalizada, las ansias populares de cambio siguen presentes en Bahréin. Según el **Centro de Bahréin para los Derechos Humanos**, solamente en el primer semestre de 2017 tuvieron lugar 2.373 protestas; más de una cuarta parte enfrentó represión. Michael y Sam contemplan el potencial que todavía existe y describen el contraataque, que incluye a la sociedad civil internacional como importante aliada, necesario para mantener a Bahréin en la agenda internacional y obtener victorias significativas:

El grueso de la sociedad civil y los movimientos de oposición de Bahréin se han mantenido firmemente comprometidos con el activismo no violento y la acción internacional, y si logran soportar las crecientes restricciones que les impone el gobierno, desempeñarán un papel clave en la construcción de instituciones democráticas sostenibles.

La sociedad civil de Bahréin ha buscado desde siempre el apoyo de la comunidad internacional, incluidas las instituciones y mecanismos internacionales y las OSC internacionales. Hemos trabajado extensamente con una amplia gama de actores de la sociedad civil de Bahréin para potenciar su participación en foros tales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ayudarles a documentar los abusos de derechos humanos ante los Procedimientos Especiales de la ONU. Hemos trabajado con nuestros aliados para documentar y denunciar cientos de violaciones de los derechos humanos en Bahréin. Esto ha ayudado a constituir un repositorio creciente de documentación e informes de expertos en derechos humanos de la ONU, respaldado por el sistema de las Naciones Unidas.

Bahréin ha gozado de considerable atención en los foros políticos internacionales. Desde 2011, ha habido una seguidilla de cinco declaraciones conjuntas multilaterales y multi-regionales, emitidas por el Comité sobre Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos en Bahréin. Hasta 48 gobiernos se han sumado para elevar una preocupación colectiva sobre los continuos abusos que ocurren en el reino. Las declaraciones han sido una herramienta valiosa para mantener el foco sobre el historial de derechos humanos de Bahréin y han conferido validación y protección al trabajo de los activistas de derechos humanos en el país. En la UE, Bahréin ha sido blanco de reiterado escrutinio por parte de miembros del Parlamento Europeo, a través de sucesivas resoluciones sobre derechos humanos que han abordado casos de defensores de derechos humanos, presos políticos y ejecuciones, entre otros abusos sistemáticos.

Dado que el espacio para la sociedad civil nacional se ha cerrado cada vez más, los defensores y activistas de derechos humanos de Bahréin buscan apoyarse más y más en espacios externos protegidos para impulsar su labor de derechos humanos. El acceso sigue siendo un problema clave, tanto para que los actores internacionales ingresen a

Bahréin para llevar a cabo su trabajo de derechos humanos como para que la sociedad civil de Bahréin viaje al exterior sin temer prohibiciones arbitrarias o represalias violentas al regreso. Sin embargo, la sociedad civil sigue trabajando en la organización de conferencias, eventos y programas dentro de la región y en el extranjero, y se ha apoyado cada vez más en las comunidades de exiliados de Bahréin para hacer avanzar su trabajo desde el exterior.

Las campañas de incidencia con coaliciones de grupos de la sociedad civil de Bahréin, la ONU, la UE y otros actores internacionales han arrojado a lo largo de los años una serie de victorias y éxitos. En respuesta a diversas presiones internacionales, el gobierno de Bahréin ocasionalmente ha liberado presos políticos o defensores de derechos humanos encarcelados.

Pero el movimiento de protesta de Bahréin necesita más apoyo. La mayoría de los activistas y líderes de la protesta entrevistados por CIVICUS afirmó que consideraba que el movimiento de protesta de Bahréin no estaba recibiendo suficiente apoyo de las OSC internacionales, de otros movimientos de protesta, de los medios de comunicación internacionales, de las organizaciones internacionales o de otros estados. Se trata de un déficit crítico ya que, desde la perspectiva de estos integrantes de los movimientos de protesta, los dos factores que más podrían contribuir a mejorar la sustentabilidad de sus movimientos son la flexibilización de las restricciones internas sobre las OSC y la presión diplomática y el apoyo internacional.

Por su dependencia de sus alianzas extranjeras, el gobierno de Bahréin es extremadamente sensible a las críticas internacionales, como lo indica su tendencia a reprimir a quienes se atreven a expresar disenso en las redes sociales o participan en foros internacionales. En vísperas de su evaluación, en el mes de mayo, en el marco del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, **por lo menos 32 activistas**, defensores de derechos humanos y periodistas fueron arrestados

y recibieron prohibiciones de viajar. Se trató de una clara movida para evitar que compartieran su testimonio. Muchos de los detenidos fueron retenidos en malas condiciones, y se denunció que permanecieron esposados, sin autorización de salir de sus celdas para recibir tratamiento médico, y sin poder ver a sus familias.

En consecuencia, la sociedad civil, sobre todo la de EEUU y el Reino Unido, debería utilizar la sensibilidad del gobierno de Bahréin como palanca, trabajar para avergonzar a sus propios gobiernos por su complicidad con abusos graves de derechos humanos, y presionarlos para que adopten una línea más dura en materia de derechos humanos en su trato con el estado de Bahréin. A pesar de la aterradora campaña represiva, el movimiento pro-democracia de Bahréin sigue vivo. Todavía hay allí algo valioso y merecedor de apoyo.

EGYPTO: UNA NUEVA LEY, UN NUEVO PROBLEMA PARA LA SOCIEDAD CIVIL

El optimismo que caracterizó a la **revolución** de 2011 en **Egipto** se disipó hace tiempo, y fue reemplazado por una sombría lucha por la supervivencia de la sociedad civil bajo el continuo ataque de un estado militar. Bajo un **estado de emergencia** casi permanente, el espacio cívico altamente restringido de Egipto empeoró aún más en mayo, cuando entró en vigencia la draconiana **ley sobre ONG**. La ley, **descrita** por la Red Árabe de ONG para el Desarrollo como una “sentencia de muerte para la sociedad civil independiente”, impone una nueva ola de reglamentaciones burocráticas y restricciones para las OSC egipcias. Impide que las OSC nacionales publiquen los resultados de encuestas y estudios sin obtener primero el permiso del Estado. Se calcula que más de 46.000 organizaciones fueron afectadas por la nueva ley, a la cual se tendrán que adecuar en el curso de un año para evitar ser penalizadas.

Mohamed Zaree, del Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), reflexiona sobre las motivaciones de control que subyacen a la nueva ley y el clima más amplio de restricciones que ésta viene a reforzar:

El gobierno estaba, y aún está, intentando cerrar completamente el espacio cívico. O más bien, el presidente junto con el aparato de seguridad lo están intentando, ya que el presidente está prácticamente gobernando solo.

*Claramente, la **Ley de ONG** no es una ley aislada; encaja perfectamente en una estrategia más amplia para restringir a la sociedad civil. Bajo la nueva ley, una OSC puede ser multada y su director puede ser encarcelado por hasta cinco años por realizar una encuesta o publicar un informe sin la aprobación del gobierno, o por contratar a un trabajador extranjero. Pueden imponerte una sentencia de dos años en prisión por el mero hecho de cambiar la sede central de una organización sin notificar a las autoridades.*

La ley prevé la creación de una entidad conocida como Agencia Nacional para la Regulación de las Organizaciones no Gubernamentales Extranjeras. Esta agencia determinará todas las cuestiones relacionadas con los asuntos de las OSC internacionales, el financiamiento y la cooperación entre asociaciones egipcias y cualquier institución extranjera. En un intento por combatir la acción ciudadana por todos los medios posibles, la ley confiere al gobierno el derecho de objetar cualquier resolución interna, nominación al consejo directivo e incluso la periodicidad de las reuniones de una OSC. Con total desprecio por los principios constitucionales, la ley especifica que las solicitudes presentadas ante la agencia que no reciban una respuesta en un plazo de dos meses serán consideradas denegadas.



Abogados egipcios protestan en El Cairo, la capital del país

Crédito: Getty Images

De manera que esta ley es verdaderamente una declaración de intenciones del presidente hacia la sociedad civil. El mensaje es: “ustedes trabajarán bajo una supervisión muy estricta, y si no pueden trabajar en absoluto, está bien para nosotros, porque no los queremos”.

Como lo indica Mohamed, la Ley de ONG fue una más dentro de un conjunto de leyes aprobadas o pendientes de aprobación que apuntan a restringir a la sociedad civil. En otra movida, un proyecto de ley sindical presentado en noviembre amenazó con volver imposible el funcionamiento de los sindicatos independientes. Y en vistas de las elecciones presidenciales programadas para 2018, las diversas leyes represivas pueden ser vistas como parte de una serie de medidas diseñadas para garantizar la reelección del presidente Abdul Fattah al-Sisi al mediante la supresión de la expresión de disenso y puntos de vista alternativos. Otro indicio de esta estrategia se observó en mayo, cuando un prominente abogado de derechos humanos y potencial candidato presidencial, **Khalid Ali**, fue arrestado por violación de la decencia pública. En septiembre fue sentenciado a tres meses de prisión, en una operación que se considera que fue fabricada para impedir que se convirtiera en un desafío serio para el presidente en funciones. Para Mohamed, estas acciones dejaron claro que Egipto es una dictadura y no ya una democracia:

No hay democracia en Egipto. Aquí es obvio para todos que esto es una dictadura: no existe el imperio de la ley, faltan una sociedad civil y unos partidos políticos activos y el espacio cívico se está cerrando. Aún cuando parezca que hay instituciones democráticas, tales como el parlamento, no hay ninguna clase de democracia. Las instituciones son controladas por el aparato de seguridad. Incluso las elecciones para el parlamento han sido una competencia entre aparatos de seguridad más que una competencia entre partidos. Los miembros del parlamento representan al aparato de seguridad mucho más de lo que representan al pueblo.

En las próximas elecciones presidenciales se supone que vamos a votar por un presidente, pero la elección podría convertirse fácilmente en un referéndum sobre el presidente en funciones, dado que no hay una atmósfera democrática que pueda garantizar una competencia significativa entre los candidatos a ocupar el cargo.

En la actualidad estamos viviendo bajo un estado de emergencia, con tribunales militares y juicios militares a civiles. La extremadamente represiva Ley de ONG incapacita a las OSC para monitorear las elecciones. La Ley de Asambleas de 1914 y la Ley de Protestas de 2013 restringen severamente la capacidad de los ciudadanos para reunirse y manifestarse. El Estado y las agencias de seguridad



NECESITAMOS QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SIGA EJERCIENDO PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO, FACILITANDO EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EGIPTO Y EN EL EXTRANJERO, Y PROPORCIONANDO PROTECCIÓN A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADOS.



controlan los medios de comunicación, incluso canales nominalmente privados, así que no hay posibilidad de que se escuchen opiniones diversas. De modo que es probable que las elecciones se conviertan en un referéndum.

Mohamed y su organización han experimentado estas restricciones en carne propia. En mayo Mohamed fue citado para un interrogatorio como parte de la causa sobre financiamiento extranjero emprendida contra varias OSC, también conocida como **Causa 173**. Por medio de este proceso judicial 37 OSC han sido criminalizadas por recibir fondos internacionales. En el momento de redactar este informe, Mohamed se enfrenta a acusaciones en esta causa, además de a otros cargos, que podrían suponerle una pena de prisión perpetua. Esto significa, afirma Mohamed, que, aunque los efectos de la Ley de ONG todavía están por verse, hay otros componentes de la maquinaria represiva que ya los han afectado a él y a su organización:

Muchas organizaciones de derechos humanos se han achicado o han trasladado a parte de su personal al extranjero. Yo sigo en El Cairo, pero mucha gente que trabaja con CIHRS se ha ido del país y desde 2014 la organización tiene su base en Túnez.

Los activos de nuestro director han sido congelados, pero esto sucedió como resultado de la aplicación del Código Penal y no de la Ley de ONG. Yo tengo prohibido viajar por efecto de la aplicación del Código Penal. He estado bajo investigación y he enfrentado tres acusaciones, dos de ellas bajo el Código Penal y la tercera, la más leve, bajo la Ley de ONG.

Esta última acusación conlleva una pena de hasta seis meses de prisión. Las otras dos, en cambio, pueden resultar en cadena perpetua. Los dos cargos más serios que enfrento se relacionan con la recepción de fondos no autorizados del extranjero y el establecimiento de una organización de naturaleza internacional sin un permiso. Si bien esta

*causa, la Causa 173, se remonta a 2011, estos delitos se volvieron más serios tras la **reforma** del Código Penal en 2014. Como hago frente a dos acusaciones, puedo llegar a recibir dos condenas consecutivas a cadena perpetua.*

En reconocimiento por su contribución a la promoción de los derechos humanos en medio de la represión, en octubre Mohamed recibió el **premio anual** de la Fundación Martin Ennals para defensores de derechos humanos; sin embargo, no se le permitió viajar para recibirlo. Mohamed ofrece testimonio de los efectos personales de estos ataques:

Como resultado de una prohibición de viajar, no pude ir a Ginebra a recibir el premio Martin Ennals. Los organizadores intentaron ponerse en contacto con el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores para que levantaran la prohibición, pero no recibieron ninguna respuesta, así que mi esposa y mis dos hijas viajaron a recibirlo en mi nombre.

Por supuesto que todo esto me ha afectado. Estoy en un estado de negación; trato de no pensar que podría ir a la cárcel. Evito este tipo de pensamientos y trato de hacer una vida normal. Mi familia también está preocupada y esto les ha afectado el estado de ánimo, así que fue bueno para ellos ir a Ginebra a recibir mi premio. En Egipto uno no puede predecir nada; siempre existe temor por lo que podría suceder a continuación. Podría finalizar esta entrevista y encontrar a la policía llamando a mi puerta para arrestarme. Esto podría pasar en cualquier momento, así que es mejor no pensar mucho en ello.

El de Mohamed no es un caso único: durante 2017 hubo numerosos ejemplos de ataques del Estado contra activistas y organizaciones, y particularmente contra los involucrados en la Causa 173. Como lo ejemplifica la experiencia de Mohamed, una táctica corriente fue la imposición de limitaciones a los movimientos de los activistas de la sociedad civil. En octubre, a **Magdy Abdel Hamid Belal**, director de la Asociación Egipcia para el Mejoramiento

de la Participación Comunitaria, se le impidió viajar a Jordania. El mes anterior **Ibrahim Metwally**, un prominente abogado de derechos humanos y coordinador de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, fue arrestado y detenido antes de realizar un viaje que tenía planeado a Ginebra donde iba a presentar pruebas ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Su detención fue posteriormente prorrogada y, lo que es peor, emergieron denuncias creíbles de tortura. Sigue detenido en el momento de escribir estas líneas, en tanto que otras personas vinculadas con la Asociación de Familiares de Desaparecidos también sufrieron detenciones arbitrarias y torturas. Como lo sugiere la experiencia de este grupo, la tortura es un peligro creciente para los activistas en Egipto: el **informe anual** del Comité Contra la Tortura de la ONU destacó que el Estado hace uso sistemático de la tortura contra personas arbitrariamente detenidas, y que no se realizan investigaciones imparciales de las denuncias de tortura.

Otra táctica empleada es el cierre forzoso de organizaciones. En febrero, el **Centro Al-Nadeem** para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia, una OSC que trata a víctimas de tortura y trauma y documenta abusos policiales, fue cerrada por la fuerza. Tras la intervención de la Autoridad del Comisionado del Consejo de Estado, se le permitió volver a abrir el mes siguiente, pero su futuro sigue en peligro. Y naturalmente, los medios no han quedado al margen de la represión, ya que el Estado ha intentado controlar lo que los ciudadanos pueden leer, ver y decir. En mayo, por ejemplo, el gobierno **bloqueó el acceso** a 21 sitios web, entre ellos los de algunas populares fuentes de noticias como Al Jazeera y el Huffington Post en árabe, acusándolos de “difundir mentiras” y “apoyar al terrorismo”.

En condiciones tan restringidas, ha sido difícil para la sociedad civil ofrecer una respuesta. Mohamed, sin embargo, explica las medidas que ha tomado CIHRS, poniendo énfasis en el trabajo a nivel internacional:

Seguimos intentando hacer normalmente nuestro trabajo cotidiano. Como nos dedicamos a monitorear abusos de derechos humanos,

tenemos más trabajo que nunca. Estamos sufriendo las peores restricciones justamente cuando somos más necesarios que nunca.

*Seguimos cuestionando la legalidad de los procedimientos utilizados en las causas abiertas contra nosotros. Algunos defensores de derechos humanos han cuestionado la legitimidad del juez que preside sus casos. CIHRS ha **cuestionado** la decisión de extender el nombramiento del juez que preside sobre la causa 173 y afirmó que esta y otras violaciones procesales han invalidado el caso.*

Pero hemos aprendido que cuestionar restricciones tales como la prohibición de viajar y el congelamiento de activos a través de medios legales puede ser inútil, dada la destrucción sufrida por el sistema judicial egipcio. Lo que estamos haciendo en cambio es plantear estas cuestiones ante la comunidad internacional. La presión de la comunidad internacional no mejora automáticamente la situación, pero por lo menos ayuda a que nuestra situación no empeore todavía más. Los actores internacionales se han reunido muchas veces con funcionarios del gobierno, en El Cairo y en el extranjero, para ejercer presión a fin de que no se nos imputen cargos adicionales y que se cierren las causas contra nosotros.

En suma, estamos aplicando dos estrategias para contrarrestar las restricciones: lucha legal y presión internacional. Pero en términos de eficacia, la presión internacional definitivamente está en primer lugar.

Al igual que en Bahréin, el Estado egipcio impone a la sociedad civil prohibiciones de viajar porque quiere salvarse de la exposición internacional. En parte, es en el ámbito internacional donde la sociedad civil egipcia puede recibir apoyo, entre otras cosas, para cuestionar la retórica del combate contra el terrorismo y el extremismo que el Estado usa para justificar la represión. Mohamed identifica la ayuda que la asediada sociedad civil requiere de la comunidad internacional:

Necesitamos que la comunidad internacional siga ejerciendo presión sobre el gobierno, facilitando el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Egipto y en el extranjero, y proporcionando protección a los defensores de derechos humanos amenazados.

*Los líderes de sociedades democráticas están en la mejor posición para ejercer este tipo de presión. Yo no quiero ver al presidente francés, Emmanuel Macron, dando lecciones de derechos humanos a nadie. Ese no es su trabajo; en realidad, es mi trabajo. Lo que él podría hacer es demostrar integridad mediante la provisión de protección y el uso de su influencia para conseguir ligeras mejoras en la situación de derechos humanos, en lugar de **vender aviones de guerra Rafale** y demás equipamiento militar a Egipto. Hasta ahora, el precio de esos cazas Rafale ha sido el silencio y la alabanza del dictador.*

El gobierno egipcio enfrenta ahora la amenaza del extremismo e insiste en que todos debemos luchar juntos contra el terrorismo. Pero lo que ellos necesitan comprender es que la seguridad y los derechos humanos están muy vinculados. En lugar de tratar individualmente con los terroristas arrestándolos o bombardeándolos, necesitan tratar con las causas de fondo de la radicalización en Egipto. Es importante que se den cuenta de que la represión es parte del problema, no de la solución.

Estos pueden ser tiempos de desesperanza para la sociedad civil egipcia, que lleva todas las de perder. Mohamed reflexiona sobre el significado que tienen los eventos de 2017 para las esperanzas de la revolución de 2011 y acerca del destino del optimismo de aquellos tiempos:

No me gustaría decir que la revolución democrática de 2011 ha sido derrotada, pero por lo menos debemos reconocer que ha retrocedido momentáneamente. Depositamos grandes expectativas en la revolución del 25 de enero y eso nos dio algo de esperanza, que

todavía sobrevive. Pero técnicamente, no queda nada de la revolución excepto beneficios para el ejército, la policía y el poder judicial. En cambio, no ha habido beneficios para la gente que participó o lideró la revolución. Mucha gente que participó está en prisión o en el exilio. Pero la cosa aún no ha terminado; incluso si estamos pasando tiempos muy difíciles, el 25 de enero de 2011 se dio un paso que será muy difícil de borrar. Entonces, yo diría que en este momento la revolución está hibernando.